

Santiago, diez de octubre de dos mil veintitrés.

**Vistos:**

En autos RIT O-624-2021, RUC 2140356249-9, del Juzgado del Trabajo de Temuco, caratulados “Abello Vilugrón Pablo Antonio con Municipalidad de Melipeuco”, por sentencia de tres de enero de dos mil veintidós, se acogió la demanda de declaración de relación laboral y despido injustificado, y se la rechazó en lo concerniente al cobro de cotizaciones previsionales y a la acción de nulidad del despido.

Las partes dedujeron recursos de nulidad y la Corte de Apelaciones de Temuco, por resolución de siete de junio de dos mil veintidós, desestimó el de la demandada y acogió el del demandante, por lo que invalidó el fallo de mérito y dictó el de reemplazo, en que declaró que se hace lugar a la demanda también en lo relativo al cobro de cotizaciones previsionales y de salud devengadas durante todo el período trabajado.

Respecto de dicho pronunciamiento demandante y demandada interpusieron recursos de unificación de jurisprudencia para que esta Corte los acoja y dicte la sentencia de reemplazo que describen.

Se ordenó traer los autos en relación.

**Considerando:**

**Primero:** Que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando, respecto de la materia de derecho objeto del juicio, existen distintas interpretaciones sostenidas por uno o más fallos firmes emanados de los tribunales superiores de justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del asunto de que se trate, sostenida en las diversas resoluciones y que hayan sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar copia fidedigna de la o de las que se invocan como fundamento.

**Segundo:** Que el demandante solicita se unifique la jurisprudencia, determinando la procedencia de la sanción de la nulidad del despido y del pago de cotizaciones de seguridad social, en particular, las referidas al seguro de cesantía, cuando la relación laboral ha sido declarada por la sentencia que se impugna.

Reprocha que la decisión se apartara de la doctrina sostenida en las decisiones que acompaña para efectos de su cotejo, que corresponden a las dictadas por la Corte de Apelaciones de San Miguel en causa rol N°467-2018 y por esta Corte en los ingresos rol N°11.419-2019, 45.842-2016 y 381-2017.

Las dos primeras sostienen que, establecida la existencia de relación laboral con un municipio u otro organismo integrante de la Administración del



Estado, debe accederse al cobro de las cotizaciones de seguridad social adeudadas durante la vigencia del contrato, porque la ley considera que el entero de los aportes que deben pagar los trabajadores para los efectos previsionales, corresponde a una carga que le compete al empleador, mediante descuento que debe ejercer de sus remuneraciones, a fin de ponerlos a disposición del órgano previsional pertinente, dentro del plazo que la ley fija, agregando la segunda que la naturaleza imponible de los haberes es determinada por el legislador, de modo que es una obligación inexcusable del empleador.

En tanto que las últimas, destacan el carácter declarativo de la sentencia, del que se deriva que si el empleador no dio cumplimiento a la obligación establecida en el inciso quinto del artículo 162 del Código del Trabajo, corresponde aplicarle el castigo pecuniario que prevé, consistente en el pago de las remuneraciones y demás prestaciones del trabajador, desde la fecha del despido hasta la de su convalidación, sin que sea obstáculo para ello que haya sido el fallo el que reconoció la existencia de una relación de naturaleza laboral.

**Tercero:** Que, a su vez, la demandada solicita precisar la pertinencia de gravarla con el pago de las cotizaciones de seguridad social, cuando las leyes N°20.225 y 21.133, han entregado su cumplimiento al prestador del servicio.

A fin de acreditar la existencia de pronunciamientos diversos sobre la materia, incorporó las sentencias pronunciadas por esta Corte en los antecedentes rol N°41.760-2017 y 14.279-2019, en las que se desestimó la aplicación de la sanción de nulidad del despido, tratándose de relaciones laborales que tienen su origen en contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado.

**Cuarto:** Que la decisión impugnada, en lo que interesa, acogió parcialmente el recurso de nulidad planteado por el demandante, fundado en la causal prevista en el artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción de su artículo 58, en relación con los artículos 17, 19, 83 y 84 del Decreto Ley N° 3.500.

Lo desestimó en cuanto perseguía la declaración de nulidad del despido, siguiendo para ello la doctrina fijada en los fallos de unificación de jurisprudencia que indica, conforme a la cual si bien la sentencia que reconoce una relación laboral es de naturaleza declarativa, procediendo la sanción en caso de constatar el no pago de las cotizaciones, dicha situación cambia cuando el empleador es un órgano de la Administración del Estado respecto de los contratos a honorarios que celebra, dado que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal, que, en principio, le otorgaba una presunción de legalidad, no configurándose la hipótesis de simulación o fraude. Y lo acogió, en lo relativo a la acción de cobro de cotizaciones, también como consecuencia de aplicar el criterio plasmado en las



decisiones de esta Corte que señala, en las que se ha expresado que el pronunciamiento judicial sólo constata una situación preexistente, de manera que la obligación se encontraba vigente desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones por parte del empleador, sea que se les haya dado esa u otra denominación, agregando que este razonamiento es comprensivo tanto de las cotizaciones previsionales como de salud, atendido el tenor literal del citado artículo 58 del código del ramo, que al establecer la referida obligación alude a las “cotizaciones de seguridad social”, misma formulación amplia que utilizan los artículos 1 y 3 de la Ley 17.322.

Por consiguiente, se invalidó el fallo impugnado y se dictó el de reemplazo, en que se acogió la demanda tanto en lo que atañe a la declaración de relación laboral y despido injustificado, como respecto del cobro de cotizaciones de seguridad social, disponiendo el pago de las cotizaciones previsionales y de salud durante todo el período trabajado.

**Quinto:** Que, en consecuencia, al cotejar lo resuelto en las sentencias invocadas por las partes con lo decidido en la que se impugna, es posible concluir que concurre el presupuesto establecido en el artículo 483 del Código del Trabajo para unificar la jurisprudencia sobre las materias de derecho propuestas, esto es, la existencia de interpretaciones diversas en relación a una cuestión jurídica proveniente de tribunales superiores de justicia, razón por la que corresponde determinar cuál postura debe prevalecer y ser considerada correcta.

**Sexto:** Que respecto de uno de los asuntos planteados por el demandante, esto es, la aplicación de la sanción de la nulidad de despido cuando la sentencia que se impugna declara que el vínculo entre las partes queda regido por el Código del Trabajo, cabe hacer presente que se trata de una materia sobre la cual, en algún momento, existieron distintas interpretaciones, como se advierte de las sentencias ofrecidas por la parte, pero, lo cierto es que a partir de la dictada en la causa rol N° 41.500-2017, una nueva comprensión doctrinal del tema condujo a alterar la jurisprudencia que se venía sosteniendo sobre el asunto, de manera que a contar de dicho dictamen, como se ha reiterado en las dictadas en los autos rol N°37.339-2017, 36.601-2017, 28.229-2018, 4.440-2019 y 21.989-21, entre muchas otras, se ha decidido que tratándose de relaciones laborales que tienen como fundamento la celebración de contratos a honorarios con órganos de la Administración del Estado -entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575-, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la punición de la nulidad del despido, esto es, que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgó una presunción de



legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido.

También se ha considerado que la aplicación -en estos casos-, de la institución contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que, para ello, requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido, por lo que el recurso deberá ser rechazado en lo que a este acápite concierne.

**Séptimo:** Que, asimismo, ambas partes han solicitado un pronunciamiento acerca de la procedencia de la condena al empleador al pago de las cotizaciones de seguridad social devengadas durante la vigencia de la relación contractual que la sentencia impugnada calificó como laboral. El demandante, a fin que se precise que debe incluir también a las destinadas a financiar el seguro de cesantía del trabajador; y la demandada, para que se determine que, en conformidad a las disposiciones contenidas en las leyes N° 20.225 y 21.133, tal obligación grava al dependiente y no al empleador.

**Octavo:** Que, para decidir este segundo aspecto, es necesario, en primer término, reiterar que la premisa que esta Corte ha sostenido invariablemente en materia de cotizaciones de seguridad social, está dada por el reconocimiento de la orden contenida en el artículo 58 del Código del Trabajo, que impone al empleador deducir de las remuneraciones de los trabajadores *“las cotizaciones de seguridad social”*, tratándose de un descuento de carácter de obligatorio que las afecta, cuya naturaleza imponible es determinada por ley, lo que hace inexcusable su cumplimiento, como lo refuerzan y precisan los artículos 17 y 19 del Decreto Ley N°3.500, que establecen la obligatoriedad del sistema para los afiliados menores de sesenta y cinco años de edad si son hombres y menores de sesenta años si son mujeres, y señalan que es el empleador quien debe declarar y pagar las cotizaciones en los organismos pertinentes dentro de las fechas indicadas.

Además, para sostener la vigencia de la obligación, sin perjuicio de que la relación, en su origen, no haya sido reconocida como laboral por las partes, se ha acudido a la presunción contenida en el artículo 3°, inciso segundo, de la Ley N° 17.322, atendidos los argumentos previos y el carácter declarativo que tiene la sentencia laboral, que esta Corte ha reconocido invariablemente, como se advierte de las sentencias dictadas en los antecedentes Rol 6.604-2014, 9.690-2015, 40.560-2016, 76.274-2016 y 3.618-2017, entre otras



Por otra parte, se ha dicho también que los razonamientos precedentes son comprensivos tanto de las cotizaciones previsionales como de salud, atendido el tenor literal del citado artículo 58 del código del ramo, que al establecer la ya referida obligación alude a las “*cotizaciones de seguridad social*”, misma formulación amplia que utilizan los artículos 1 y 3 de la Ley N°17.322; y que, por lo demás, corresponde a la judicatura dar eficacia a los derechos consagrados en el artículo 19 N°9 y 18 de la Constitución Política, que obliga al Estado, a través de todos sus Poderes, a garantizar el acceso de todos los habitantes a las prestaciones de salud y seguridad social, lo que dada la configuración que la legislación ha hecho del sistema, supone velar por el oportuno cumplimiento de la obligación de aportar a financiar los sistemas que las administran, sea de manera directa para los trabajadores independientes o a través de la retención del empleador para los dependientes.

Luego, se debe agregar que lo anterior resulta aplicable también a las cotizaciones que financian el seguro de cesantía consagrado por la Ley N°19.728, pues corresponde igualmente a uno establecido en forma obligatoria en favor de los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo, de modo que el inicio de la relación laboral de un trabajador no sujeto al seguro generará su incorporación automática a éste y la obligación de cotizar en los términos establecidos en el artículo 5° de la misma ley y, en caso de incumplimiento, el artículo 11 de la ley prevé un sistema de cobro y sanciones similar al del DL N° 3.500, haciéndole aplicable numerosas normas de la Ley N°17.322, que regula la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social. De manera que por los fines que satisface este seguro, el carácter obligatorio y universal con que se ha impuesto, y por la técnica de pago y cobro de las cotizaciones que contribuyen a financiarlos, no cabe sino concluir que se trata de una prestación de seguridad social a efectos de lo previsto en el artículo 58 del Código del Trabajo, por lo que, en principio, y sin perjuicio de lo que se precisará más adelante, si la obligación no fue cumplida durante la vigencia del contrato, deberá serlo con posterioridad.

Por consiguiente, acreditado que el empleador no cumplió con su obligación previsional durante la vigencia del vínculo, la condena debe incluir la de enterp de las previsionales propiamente tal, como las de cesantía y salud.

**Noveno:** Que, por otra parte, sin perjuicio que la legislación impone al empleador el entero de las cotizaciones de seguridad social, previo descuento al trabajador, asignándole el rol de agente retenedor, lo cierto es que cuando el trabajador paga directamente sus cotizaciones en las instituciones pertinentes, sea porque así lo ha decidido en forma voluntaria o porque lo ha acordado con su



empleador, incorporando una cláusula en tal sentido en el contrato a honorarios mediante el cual se formalizó la contratación en su origen, se trata de una conducta a la que debe darse valor, pues beneficia su situación previsional, permitiéndole acceder a prestaciones de salud y/o cesantía, e incrementar los fondos con que financiará su futura pensión.

En ambos casos, esto es, pago voluntario de las cotizaciones por parte del trabajador o existencia de una cláusula en el contrato que así lo disponga, este tribunal se ha pronunciado previamente reconociendo los efectos jurídicos de tales acciones, al entender que por su intermedio se cumple la finalidad perseguida por la norma, en cuanto a que el trabajador pueda acceder efectivamente a las prestaciones que le garantiza la Constitución Política de la República en su artículo 19 N°18.

En efecto, tratándose del primero, a partir de la sentencia dictada en causa rol N° 35.653-2021, seguida de las emitidas en los ingresos 41.026-2021, 98.552-2022 y 106.732-2023, entre otras, se ha sostenido sin variación la improcedencia de condenar al pago de las cotizaciones previsionales, de cesantía y salud, cuando el trabajador las ha enterado directamente ante los organismos respectivos. Para ello se ha considerado que el objetivo perseguido a través de la obligación consagrada en el artículo 58 del Código del Trabajo, también puede ser alcanzado cuando es el trabajador quien paga directamente sus cotizaciones de seguridad social ante los organismos administradores, evitando la existencia de las denominadas “lagunas” en su cuenta de capitalización individual y habilitándolo para acceder a los beneficios que financian, por lo que no hay un daño previsional que reparar, lo que torna en improcedente ordenar un doble pago de la prestación que se trata, de manera que sólo procedería la condena cuando las referidas cotizaciones no hayan sido previamente enteradas y sólo en la parte que se adeude.

En el segundo caso, esto es, cuando el trabajador asumió el entero directo del pago mediante una cláusula incorporada en el contrato de honorarios respectivo, sea que haya cumplido con la obligación o no, se ha decidido lo mismo, lo que aparece como una consecuencia de lo razonado a propósito de la aplicación de la sanción de la nulidad del despido a este tipo de casos, dado el origen de la contratación y la presunción de legalidad que lo amparó, lo que permite dar valor también a este tipo de cláusulas que no serían procedentes en un contrato de trabajo ordinario, nacido a partir del acuerdo de voluntades de las partes que aceptan obligarse en los términos descritos en el artículo 7° del Código del Trabajo. En la sentencia dictada en causa rol N°98.552-2022, se declaró que si el actor se obligó a enterar directamente las cotizaciones en los organismos



pertinentes, cualquier deuda que pueda existir y perjuicios que de ello se deriven serán consecuencia de su propio incumplimiento, por lo que no hay un daño previsional que pueda ser imputado al demandado, lo que torna en improcedente la condena a solucionarlos.

Esta última hipótesis con la sola excepción de las cotizaciones destinadas a financiar el seguro de cesantía establecido por la Ley N°19.728, pues el pacto cuyos efectos jurídicos se reconocen, supone que el trabajador, formalmente denominado prestador de servicios durante la vigencia del vínculo, debió asumir directamente el pago de sus cotizaciones de seguridad social en conformidad a lo dispuesto por la Ley N°20.055, que, sin perjuicio de su entrada en vigencia diferida en este punto, modificó el Decreto Ley N°3.500, de 1980, entre otros cuerpos legales, e hizo obligatorio para los independientes el pago de una serie de cotizaciones de seguridad social, en particular, las destinadas a financiar los sistemas previsionales, de salud común (Isapre y Fonasa) y de salud profesional, pero, no consideró las del seguro de cesantía; las que, en consecuencia, nunca se entendieron incorporadas en los pactos de esta naturaleza, por lo que, una vez esclarecida la naturaleza del contrato, deben ser solucionadas por el empleador en los términos que más adelante se indicará.

**Décimo:** Que, en conformidad a lo previamente expuesto, es posible asentar que la regla en materia de cotizaciones de seguridad social, esto es, previsionales, de cesantía y de salud, es la vigencia de la obligación de pago por parte del empleador, salvo que tratándose de contrataciones originadas en un contrato de prestación de servicios suscrito con un órgano de la Administración del Estado, amparado en origen por la presunción de legalidad y en que el prestador de servicios tuvo durante su vigencia la apariencia de trabajador independiente, las partes hayan hecho de su cargo el cumplimiento de la obligación o, sin tal pacto, que éste las haya enterado directamente, sea en forma total o parcial.

En consecuencia, de no existir tal cláusula en el respectivo contrato de prestación de servicios y siempre que el pago de las cotizaciones no haya sido totalmente solucionado por el trabajador, deberá ser cumplido por el empleador, lo que conduce a otra arista del problema, referida a las sanciones que el artículo 19 del Decreto Ley 3.500 y la Ley N°17.322 imponen al empleador que paga fuera del plazo que la normativa establece, pues de acuerdo a los incisos 7, 10 y 11 del artículo 19 del Decreto Ley N°3.500 y a los artículos 21 y 22 a) de la Ley N°17.322, la falta de declaración y pago oportuno de las cotizaciones previsionales queda sujeta a una multa a beneficio fiscal, además de incrementarse su monto con los reajustes e interés penal que establecen.



Sin embargo, como a propósito de la aplicación a este tipo de casos de la institución consagrada en el inciso 5° del artículo 162 del Código del Trabajo se ha reconocido que los órganos de la Administración del Estado no podían, de acuerdo a la normativa y las reglas presupuestarias que los rigen, pagar libremente las cotizaciones de sus prestadores de servicios a honorarios durante la vigencia del vínculo, requiriendo para convalidar el despido, una vez calificada tal relación como laboral, de un pronunciamiento judicial condenatorio, estando, en definitiva, de buena fe y amparados por la tantas veces mencionada presunción de legalidad, debe concluirse que no puede tenérseles como deudor en mora o incumplidor para estos efectos, pues resultaría contradictorio no sancionarlos con la declaración de nulidad del despido, para luego imponerles multas e intereses penales.

Lo anterior, conduce a que las cotizaciones a que resulte condenado este tipo de empleador, amparado por la referida presunción, deberán ser incrementadas con reajustes, calculados desde la oportunidad que indican el inciso décimo del artículo 19 del Decreto Ley N°3.500 y el inciso tercero del artículo 22 de la Ley N°17.322, y con intereses, los que sólo se devengarán desde la época en que el fallo que declaró el carácter laboral del vínculo quedó ejecutoriado y sobre una base diversa a la establecida en el Decreto Ley N°3.500 y en la Ley 17.322, pues considerando lo dicho se descarta la aplicación de intereses penales, de manera que deberán ser determinados en conformidad a lo previsto en el inciso tercero del artículo 63 del Código del Trabajo.

Además, a fin de mantener la debida concordancia con los razonamientos antes expuestos acerca del origen del contrato celebrado entre las partes, el cobro de dichas cotizaciones deberá excluir las multas a que aluden los artículos 19 inciso séptimo del Decreto Ley N°3.500 y 22 a) de la Ley 17.322.

**Undécimo:** Que, por último, en materia de cotizaciones de seguro de cesantía debe efectuarse una prevención adicional, dado que su financiamiento, a diferencia de lo que ocurre en cuanto a previsión y salud, es tripartito, conformándose por aportes del trabajador, del empleador y del Estado. Tratándose de dependientes con contrato de trabajo indefinido, como ocurre en el caso, la contribución al seguro, según lo prevé el artículo 5 de la Ley N° 19.728, se divide en un 0,6% de las remuneraciones imponibles de cargo del trabajador, un 2,4% de las remuneraciones imponibles de cargo del empleador y un aporte del Estado que corresponde a un monto global que se entera anualmente.

Entonces, sobre la base de lo dicho, en el caso del trabajador que no registra pago de estas cotizaciones durante la vigencia del contrato, sea efectuado por él o por su empleador, se declarará que éste debe solucionarlas, pero,





limitadas al porcentaje que es de su cargo y no el que corresponde solventar al trabajador con su patrimonio, porque, con ello, se configuraría un pago doble, gravando en forma desmedida y desigual al ente público.

**Duodécimo:** Que los razonamientos previos deben ser contrastados con los hechos asentados por la sentencia impugnada y los antecedentes allegados por las partes, de los que se desprende que la relación laboral entre las partes se desarrolló entre el 01 de junio de 2017 y el 05 de julio de 2021, siendo formalizada a través de una sucesión de contratos de prestación de servicios a honorarios, de fechas de 1 de junio de 2017, 2 de enero de 2018, 29 de mayo de 2018, 2 de enero de 2019, 2 de mayo de 2019, 2 de enero de 2020, 4 de enero de 2021, advirtiéndose que los tres últimos, esto es, desde el de 2 de mayo de 2019 en adelante, contienen una cláusula cuarta de igual tenor, en la que se libera a la demandada del pago de cotizaciones de seguridad social, agregando *“por tanto, el prestador de servicios, a virtud de lo establecido en la Ley N°20.255, será exclusivo y único responsable de enterar el pago de sus cotizaciones previsionales o cualquier otra de seguridad social”*, sin que los anteriores precisen nada a este respecto. Asimismo, las partes incorporaron oficios remitidos por FONASA y AFP Provida, que dan cuenta que en materia de salud, el demandante pagó sus cotizaciones desde julio de 2019 a julio de 2021, sin registrar pago alguno en cuanto a previsión.

**Décimo tercero:** Que, por consiguiente, procede ordenar el pago de las cotizaciones previsionales y de salud, sólo respecto del período no cubierto por la cláusula antes referida, desde el 1 de junio de 2017 al 30 de abril de 2019, debiendo desestimarse en lo restante, dada la obligación asumida por el demandante en los contratos celebrados; y en lo que atañe a seguro de cesantía, se hará lugar a su entero por todo el lapso de vigencia del contrato, esto es, desde el 1 de junio de 2017 al 5 de julio de 2021, pero, sólo respecto de la porción de cotización de cargo del empleador, equivalente al 2,4% de la remuneración imponible.

**Décimo cuarto:** Que, en tal circunstancia, yerra la Corte de Apelaciones de Temuco cuando al dictar el pronunciamiento de reemplazo ordena pagar la totalidad de las cotizaciones de seguridad social devengadas durante la vigencia del contrato. En efecto, sobre la premisa de lo que se ha venido razonando, la referida sentencia, dictada luego de acogerse el recurso de nulidad planteado, fundado en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, debió limitarse a condenar a enterar aquellas adeudadas durante el período en que las partes no convinieron una cláusula especial relativa a su pago, con la salvedad de lo dicho en materia de seguro de cesantía.



**Décimo quinto:** Que, por las consideraciones antes dichas, no cabe sino acoger parcialmente el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por el demandante en lo que concierne al cobro de cotizaciones del primer período de la relación laboral, así como también el de la demandada en lo que atañe a su segunda etapa de vigencia, invalidando, en lo pertinente, el fallo impugnado y procediendo a dictar, acto seguido y en forma separada, la correspondiente sentencia de reemplazo.

Por lo reflexionado, disposiciones legales citadas y lo preceptuado en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, **se acogen**, en lo pertinente, los recursos de unificación de jurisprudencia deducidos por las partes respecto de la sentencia de siete de junio de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que hizo lugar al recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia de tres de enero de dos mil veintidós, emanada del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, en autos RIT O-624-2021, RUC 2140356249-9, y procedió a dictar el fallo de reemplazo, y se declara que dicha sentencia es **nula parcialmente**, debiendo dictarse acto seguido y sin nueva vista, pero separadamente, la respectiva de reemplazo.

Se previene por la ministra **señora Chevesich**, que, si bien tiene una postura diferente sobre la segunda materia de derecho propuesta por el demandante, referida a la aplicación de la sanción de la nulidad del despido, en los términos señalados en los votos estampados en sentencias dictadas en causas que tratan de la misma cuestión de derecho, declina incorporarla, teniendo únicamente en consideración que ya se encuentra uniformada por esta Corte en los términos señalados en la sentencia impugnada, sin que se hayan dado a conocer nuevos argumentos que autorice su variación, tampoco que ha sido modificada; en razón de lo anterior, concurre a las restantes decisiones pues se sustentan en aquella.

Y el ministro **señor González**, previene que si bien tiene una postura diferente sobre la primera materia de derecho propuesta por el demandante, referida al cobro de cotizaciones de cesantía, en los términos señalados en los votos estampados en sentencias dictadas en causas que tratan de la misma cuestión de derecho, declina incorporarla, teniendo únicamente en consideración que ya se encuentra uniformada por esta Corte en los términos señalados en la sentencia impugnada, sin que se hayan dado a conocer nuevos argumentos que autorice su variación, tampoco que ha sido modificada.

Acordada con el **voto en contra** de la ministra **señora Gajardo** y del ministro **señor Simpértigue**, quienes fueron de opinión de acoger el arbitrio interpuesto por la demandada también en lo relativo al pago de las cotizaciones de



salud del primer período de vigencia del contrato, en atención a que al Estado le asiste la obligación legal ineludible de enterar dichas cotizaciones de sus laborantes dependientes en el organismo previsional y de sanidad que corresponda por el período que se extendió el vínculo de trabajo, y en ese contexto judicial sólo varía el beneficiario de tal prestación dineraria, pues la exigencia jurídica para el ente fiscal permanece vigente e inalterada en su fuente y origen, con la salvedad que en el caso *sub iúdice* debe restituirse al trabajador demandante las cantidades que probadamente fueron solventadas por éste con el objeto de financiar su sistema de salud obligatorio mientras duró la relación laboral. *Obiter dictum*, es menester señalar que dicha conclusión se ve corroborada con los fundamentos vertidos en las sentencias ya ejecutoriadas, dictadas por esta Corte Suprema Roles N° 29.471-19, N° 28.930-19, N° 28.932-19, y más recientemente en el N° 98.552-22 las que fueron debidamente publicadas y cuyos basamentos se dan por reproducidos en este apartado, para evitar repeticiones innecesarias.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 32.396-2022.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señoras Gloria Ana Chevesich R., María Cristina Gajardo H., señor Diego Simpertigue L., ministro suplente señor Hernán González G., y el abogado integrante señor Gonzalo Ruz L. No firma el ministro suplente señor González y el abogado integrante señor Ruz, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por haber terminado su periodo de suplencia el primero y por estar ausente el segundo. Santiago, diez de octubre de dos mil veintitrés.

GLORIA ANA CHEVESICH RUIZ  
MINISTRA  
Fecha: 10/10/2023 15:45:17

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE  
MINISTRA  
Fecha: 10/10/2023 15:45:18

DIEGO GONZALO SIMPERTIGUE  
LIMARE  
MINISTRO  
Fecha: 10/10/2023 15:45:19



En Santiago, a diez de octubre de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.



Santiago, diez de octubre de dos mil veintitrés.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 483-C del Código del Trabajo, se dicta la sentencia de reemplazo que sigue en unificación de jurisprudencia.

**Vistos:**

Se reproduce la sentencia de reemplazo dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco el siete de junio de dos mil veintidós.

Asimismo, se dan por reproducidos los razonamientos séptimo a décimo tercero de la sentencia de unificación de jurisprudencia que antecede.

**Y se tiene en su lugar y, además, presente:**

**Primero:** Que son hechos acreditados que el demandante prestó servicios en favor de la demandada, que se desarrollaron bajo subordinación y dependencia, en los términos descritos en el artículo 7° del Código del Trabajo, los que se iniciaron el 01 de junio de 2017 y concluyeron el 05 de julio de 2021, cuando fue despedido sin cumplimiento de las formalidades previstas por el artículo 162 del Código del Trabajo.

**Segundo:** Que el trabajador se obligó a pagar directamente sus cotizaciones previsionales y de salud a contar del 2 de mayo de 2019, correspondiéndole al empleador cumplir con dicha carga en lo que atañe al período previo, esto es, desde el 1 de junio de 2017 al 30 de abril de 2019, lo que no hizo, por lo que deberá ordenarse el entero de las cotizaciones previsionales, da salud de ese período, así como las de cesantía devengadas durante toda la vigencia del vínculo, en este caso, únicamente respecto del porcentaje de cargo del empleador.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 63, 67, 162, 168, 172, 173, 183-A, 183-B, 446 y siguientes del Código del Trabajo, se declara:

I.- Que **SE ACOGE** la acción deducida por don PABLO ANTONIO ABELLO VILUGRON en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPEUCO, declarándose que mantuvieron una relación laboral y continua, que se extendió desde el 01 de junio de 2017 al 05 de julio de 2021, y que el despido de que fue objeto es injustificado, por lo que se condena a la demandada pagar las siguientes prestaciones:

- a) Indemnización sustitutiva del aviso previo por la suma de \$1.541.113.-
- b) Indemnización por años de servicio correspondiente a cuatro años de servicio por un monto de \$ 6.164.452.-



c) Recargo del 50% respecto de la indemnización por años de servicio conforme la letra b) del artículo 168° del Código del Trabajo, por la suma de \$ 3.082.226.-

d) Remuneración por 4 días de julio de 2021 por la suma de \$ 205.482.-

e) Cotizaciones previsionales y de salud devengadas desde el 1 de junio de 2017 al 30 de abril de 2019, calculadas sobre la base de una remuneración de \$1.541.113.

f) Cotizaciones de cesantía devengadas desde el 1 de junio de 2017 al 5 de julio de 2021, limitadas al 2,4% de la remuneración imponible antes señalada.

II.- Que las sumas referidas y condenadas a pagar en las letras a) a d) lo serán debidamente reajustadas y con los intereses previstos en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

III.- Que las cotizaciones ordenadas pagar en las letras e) y f) devengarán los reajustes que ordenan los artículos 19 del Decreto Ley N°3.500 y 22 de la Ley 17.322, calculados desde la época y en los términos que indican, e intereses calculados conforme a lo dispuesto en el artículo 63 del Código del Trabajo, y únicamente desde la época en que esta sentencia quede ejecutoriada, sin considerar la aplicación de multas.

IV.- Que SE RECHAZA la demanda en cuanto a la sanción de nulidad del despido pretendida.

V.- Que, SE RECHAZA la demandada reconvencional deducida por la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPEUCO en contra de PABLO ANTONIO ABELLO VILUGRON.

VI.- Que cada parte pagará sus costas.

Acordada con el **voto en contra** de la de los ministros **señora Gajardo** y **señor Simpértigue**, quienes estuvieron por desestimar el cobro de las cotizaciones de salud, atendidas las razones expuestas en la disidencia de la sentencia de unificación que antecede.

Regístrese y devuélvase.

N° 32.396-22.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señoras Gloria Ana Chevesich R., María Cristina Gajardo H., señor Diego Simpértigue L., ministro suplente señor Hernán González G., y el abogado integrante señor Gonzalo Ruz L. No firma el ministro suplente señor González y el abogado integrante señor Ruz, no obstante haber concurrido a la vista y al



acuerdo de la causa, por haber terminado su periodo de suplencia el primero y por estar ausente el segundo. Santiago, diez de octubre de dos mil veintitrés.

GLORIA ANA CHEVESICH RUIZ  
MINISTRA  
Fecha: 10/10/2023 15:45:21

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE  
MINISTRA  
Fecha: 10/10/2023 15:45:21

DIEGO GONZALO SIMPERTIGUE  
LIMARE  
MINISTRO  
Fecha: 10/10/2023 15:45:22



En Santiago, a diez de octubre de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

